

Gobiernos locales reciben ingentes recursos cada año

Paros acorralan a Economía

< POR MARÍA DE LA PAZ VEJA >



Fotos: Elder Bravo.

La contundente denuncia del Ministro de Economía, **Diego Borja**, en el sentido de que en 2005 distintos funcionarios del gobierno del defenestrado ex presidente **Lucio Gutiérrez**, como también del presidente **Alfredo Palacio**, firmaron acuerdos extra presupuestarios por \$ 1.028 millones (*Cuadro 1*), es una manifestación evidente del riesgo de gobernabilidad del país, de la debilidad institucional de los gobiernos y de las enormes presiones de gasto que enfrentan las finanzas públicas, con un riesgo de insostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazos.

Pero además, lleva a cuestionar si no está ya agotado el mecanismo que el gobierno central ha establecido para canalizar recursos, y si no es sino la ley del más fuerte lo que alienta las paralizaciones en una etapa en que, por el alto precio del petróleo, hay una percepción de disponibilidad de recursos en el fisco. Más que eso, en un año electoral, los políticos, desde su poder en el Congreso y en los organismos seccionales, azuzan a la ciudadanía resaltando las carencias locales, para –utilizándolas como pretexto– obtener recursos que les permitan “hacer obras” visibles (no necesariamente las prioritarias) y alimentar con ellas su popularidad en un período pre-electoral.

La ley del más fuerte se ha impuesto desde siempre y, en consecuencia, la presión política y las paralizaciones terminan con la firma de actas de paro y ofrecimientos de los gobiernos de turno. Pero este sistema que ha operado como un círculo vicioso “paro-ofrecimiento-fin del paro” está llegando a su fin porque las

MONTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS COMPROMETIDOS CON PROVINCIAS (MILLONES DE DÓLARES)

Actas firmadas	
El Oro	139
Manabí	137
Zamora	115
Loja	95
Portoviejo	82
Esmeraldas	78
Sucumbíos y Orellana	74
Azuay	63
Guayas	59
Imbabura	50
Tungurahua	48
Cañar	41
Chimborazo	19
Los Ríos	18
Cotopaxi	6
Napo	5
Total	1.028

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

ofertas se han multiplicado, el monto de pedidos ha crecido a un nivel imposible de cumplir y jamás se rinden cuentas sobre el uso de los recursos que al fin se logran.

Caótica relación de gobierno central con gobiernos locales

Un problema que no se ha abordado es que el gobierno central toma decisiones tardías, parciales y burocratizadas, que afectan negativamente la calidad de los servicios públicos. Los gobiernos locales -más cercanos y conocedores de sus problemas- pueden tomar decisiones de gasto más acertadas para su comunidad.

Pero los recursos del gobierno central llegan a los ciudadanos de las provincias no solamente a través de los ministerios, sino de una compleja estructura del Estado, con una variedad de entidades autónomas, alcaldías, consejos provinciales, organismos regionales (Crea, Cedegé, CRM, Corpecuador, Udenor, Ecorae) y fondos sociales (Fondo de Inversión Social, Fise; Fondo de Desarrollo Seccional o Fodesec; Fondo de Desarrollo de la Infancia o Fodinfia; Fondo de Solidaridad-FS; Cereps) y hasta a través de las gobernaciones de provincias. Todas estas entidades promueven proyectos y desembolsan recursos en total desorden, duplicando el gasto en algunas áreas de aten-

ción, descuidando otros servicios y sin responsabilidades claras.

Las razones del descontento

El resultado es una injusta distribución de recursos entre las provincias sobre todo en los servicios básicos, a lo que se suma una ausencia de rendición de cuentas de los recursos que reciben, tanto a la ciudadanía de la localidad como al Ministerio de Economía que transfiere los recursos. Esa situación deriva en grandes desigualdades en la calidad de vida, que motivan la protesta de la ciudadanía y de sus autoridades locales, como se observa en la diferencia de la dotación de servicios básicos (Gráficos 1, 2 y 3). Aunque la electrificación ha llegado a 90% de las viviendas, según el Censo de 2001, un 27% de viviendas todavía no están conectadas a la red de agua potable ni la reciben de un tanquero sino que se abastecen de pozos, vertientes y ríos; 68% de viviendas no disponen de teléfono y 52% no están conectadas a la red de alcantarillado para la eliminación de aguas servidas sino a pozos sépticos, pozos ciegos u otros, según los datos del INEC para dicho censo.

Estas necesidades represadas se transforman en descontento popular, la diferencia de dotación de recursos entre las provincias y la deficiencia en la calidad del gasto o en la priorización de recursos, se convierten en pedidos, y cuando estos no se cumplen, las exigencias suben de tono con paros y huelgas. Estas presiones han forzado a los gobiernos de turno a tomar los recursos del Fondo de Solidaridad como caja chica, a utilizar los recursos extraordinarios originados en un alto precio del petróleo en gasto corriente y en transferencias sin rendición de cuentas.

¿Dónde está la plata que les transfirió el Ministerio de Economía?

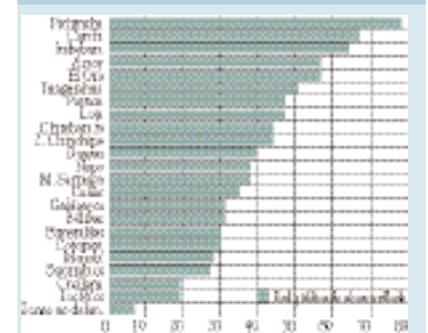
Los recursos que reciben municipios y consejos provinciales no son poca cosa. Por eso llama la atención que las necesidades básicas no estén cubiertas en un mayor porcentaje. Eso puede obedecer a una incorrecta priorización de los recur-

sos que utilizan o a una mala administración de los mismos, y por lo general a la mezcla de los dos aspectos.

El Ministerio de Economía asegura que por la Ley de Transferencia del 15% a los organismos seccionales, efectivamente se han traspasado crecientes recursos anualmente a los municipios y consejos provinciales. De 2001 a 2005, las transferencias realizadas a los municipios ascienden a \$ 2.612 millones y las efectuadas a los consejos provinciales suman \$ 1.119 millones (Gráfico 4). ¿Sabe esto la ciudadanía? Solamente para 2006 se ha presupuestado una transferencia de \$ 557 millones a los municipios, equivalente a 1,6% del PIB, y otra de \$ 239 millones (0,7 % del PIB) a los consejos provinciales. El monto es muy significativo y los ciudadanos, antes de armar un paro y causar desmanes, debieran pedir cuentas a su alcalde y a su prefecto sobre el uso de los recursos y participar en la calificación de proyectos prioritarios para ir solucionando las carencias.

EN 8 PROVINCIAS, 31% O MENOS DE LAS VIVIENDAS TIENEN ALCANTARILLADO

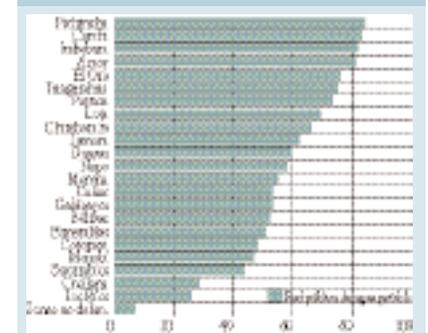
GRÁFICO 1



FUENTE: INEC, CENSO 2001.

73% DE LAS VIVIENDAS TIENEN AGUA POT. DE RED PÚB. O DE CARRO REPARTIDOR

GRÁFICO 2



FUENTE: INEC, CENSO 2001.

a 26% en el presupuesto del gobierno local. El ministro se ha negado a la entrega indiscriminada y sin beneficio de inventario de los recursos del Estado, pues esto hundiría el manejo fiscal y el principio de autoridad de la gestión económica. Él y su equipo de colaboradores han hecho ya 90 negociaciones con un plan real de desembolsos iniciales y futuros contra el avance de obras, según lo dieron a conocer a GESTIÓN. Su estrategia tiene coherencia con el programa fiscal en el cual el mensaje ha sido el uso ordenado de los recursos y un gasto fiscal bajo control para evitar mayores problemas de inflación que los que se sienten al momento. Tratan de evitar que la vorágine política que se viene con las elecciones absorba los recursos ciudadanos y se canalice a promover campañas electorales.

Pero da la impresión de que esta gestión no es comprendida ni apoyada por el Presidente de la República, incapaz de tomar decisiones en firme frente a las presiones de los partidos y de los políticos que tienen un mensaje: se requiere de un "firma-cheques" que suelte el billete para financiar el festín electoral. Si Diego Borja no es funcional a ese empeño, como lo está demostrando, no va a durar en el cargo. Los políticos, interesados en aprovecharse de los recursos del Estado, ya anunciaron el enjuiciamiento del tercer ministro de Economía del régimen.

Los últimos paros

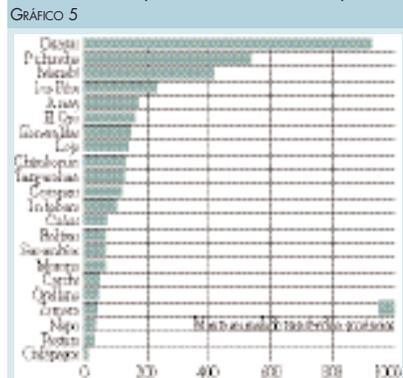
El paro de **Chimborazo** terminó el 20 de febrero, tras la negociación de los proyectos prioritarios y la oferta del Ministerio de Economía de desembolsar recursos por \$ 14,8 millones para dichas obras. Las autoridades de esa provincia, lideradas por el prefecto de Chimborazo, **Mariano Curicama**, acordaron que el gobierno entregue un flujo económico moderado pero continuo para proyectos en ejecución.

En **Napo**, la provincia de Lucio Gutiérrez, el paro tenía mayor connotación política. Exigían la transferencia de \$ 100 millones sin proyectos de contraparte, a lo cual el ministro Borja se negó rotundamente, señalando que si el Con-



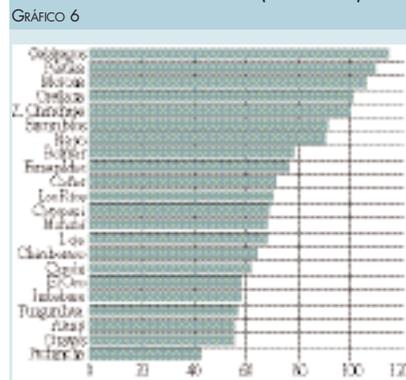
greso reasignó \$ 140 millones a los organismos seccionales en la aprobación del Presupuesto de 2006, de ese total no se le podía entregar \$ 100 millones a una sola provincia, y peor sin beneficio de inventario. El ministro no viajó a Napo pues hubo rumores de que le retendrían, en una acción de fuerza para pedir la libertad de **Lucio Gutiérrez**. El vandalismo y los desmanes rebasaron los límites razonables al utilizarse dinamita, que hirió a dos policías, y destrozar secciones del Sote y del OCP. Esas acciones merecen sanciones penales por ser delictivas y por destruir obra pública y privada; las

TRANSFERENCIAS DEL 15% POR PROVINCIA 2001-2005 (EN MILLONES DE DÓLARES)



FUENTE: MEF, SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA.

DISTRIBUCIÓN LEY DEL 15% EN 2006 POR PROVINCIA PER CÁPITA (EN DÓLARES)



FUENTE: MEF, POBLACIÓN 2006, INEC.

mismas motivaron la declaratoria de estado de emergencia en la provincia, con toque de queda por varios días. La negociación con Napo prosperó con la aceptación del régimen de otorgar financiamiento para tres proyectos: obras viales, inicio de la construcción del aeropuerto de Tena, y terminación de los tramos que faltan en la Troncal Amazónica. Entretanto, el Sote dejó de transportar 360.000 barriles por día, a un precio promedio de \$ 47,4, por lo cual sus pérdidas son de \$ 13 millones por día por lucro cesante. A su vez, el OCP está en reparación tras el sabotaje de los manifestantes. **L**